

Colombia: Lograr que el avance militar rinda frutos

I. PANORAMA GENERAL

Los casi seis años de intensas operaciones de seguridad del gobierno del presidente Álvaro Uribe contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están comenzando a producir resultados tangibles. Las fuerzas del gobierno dieron de baja a varios importantes comandantes de campo rebeldes en 2007 y a dos miembros del comando central en marzo de 2008, entre ellos a Raúl Reyes, segundo al mando, y han interrumpido severamente la comunicación entre los insurgentes, propiciando una pérdida de cohesión interna en la organización, así como la disminución de sus ingresos ilegales. Sin embargo, este progreso se ha dado a expensas del grave deterioro de las relaciones con Ecuador y Venezuela y de un mayor riesgo de aislamiento político tras el controvertido ataque aéreo contra el campamento de Reyes en territorio ecuatoriano. Las ganancias militares sólo pueden ser fructíferas si se combinan con una estrategia política que busque sistemáticamente el intercambio de insurgentes encarcelados por rehenes cautivos en manos de las FARC, que restablezca la muy necesaria cooperación con los países vecinos a lo largo de las fronteras y que promueva con determinación el desarrollo rural integrado para consolidar la seguridad y ampliar el apoyo internacional a Colombia.

El logro de un canje de rehenes por prisioneros es un reto clave para el gobierno de Uribe. Desde mediados de 2007 el tema ha adquirido una gran importancia política, tanto en Colombia como a nivel internacional, y ha contribuido a acentuar las tensiones con Venezuela. Después de una primera iniciativa del presidente francés Nicolas Sarkozy, quien busca la liberación de Ingrid Betancourt, que es ciudadana colombo-francesa, y de la liberación unilateral por parte de Uribe de unos 180 prisioneros de las FARC en mayo de 2007, el gobierno autorizó al presidente venezolano Hugo Chávez, en agosto de 2007, para facilitar el intercambio. Sin embargo, tres meses después Uribe quiso poner fin a la participación de Chávez, por la ausencia de resultados y por su evidente sesgo a favor de las FARC. En enero y febrero de 2008 las FARC liberaron unilateralmente a seis rehenes (de un total de cerca de 45 secuestrados “políticos” y otros 700 secuestrados “económicos”, los últimos de los cuales

no se han considerado parte de ninguna negociación hasta este momento) como un gesto de apoyo a Chávez. Sin embargo, esto no sirvió para avanzar en una negociación, pese al apoyo de un grupo de países amigos, entre ellos Francia y Brasil.

El ataque del 1° de marzo contra el campamento de las FARC en Ecuador que causó la muerte de Reyes detonó la más seria crisis política en la región andina desde hacía muchos años, el rechazo hacia Colombia por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Río, y el rompimiento de las relaciones con Ecuador. También pareció cerrar la puerta para nuevas liberaciones unilaterales de rehenes y para el logro de un acuerdo humanitario. Los insurgentes insisten en la desmilitarización de dos municipios y Uribe persiste en su rechazo de esta propuesta. Entre tanto, existe evidencia de que las FARC están adaptando su método de operación y su estrategia a largo plazo y, tal como ha sucedido anteriormente, es muy posible que sobrevivan a la reciente escalada militar del gobierno. Su habilidad para utilizar santuarios venezolanos y ecuatorianos plantea un gran reto a la política de seguridad de Uribe.

El gobierno de Uribe no debe jugársela toda a la estrategia militar. Debe diseñar e implementar con prontitud una estrategia complementaria que le permita ganar terreno político frente a los insurgentes, y, al tiempo, recuperar un respaldo internacional más amplio, sobre todo a nivel regional. Es crucial avanzar en el tema del intercambio de rehenes por prisioneros. La estrategia se debe enfocar en:

- diseñar incentivos políticos firmemente condicionados para avanzar en el intercambio de rehenes por prisioneros con las FARC, incluidas ya sea la desmilitarización, internacionalmente monitoreada, de los municipios de Florida y Pradera o de otra área de tamaño similar que sirva como lugar de las negociaciones durante 45 días, con base en un acuerdo previo con las FARC según el cual los secuestrados y los prisioneros se liberarían durante ese período;
- comprometer a Ecuador de inmediato y luego a Venezuela con el fin de reforzar la cooperación fronteriza e impedir el uso de santuarios, entre otras mediante el mejoramiento de las

- comunicaciones y la movilidad por helicóptero del nuevo mecanismo de monitoreo de la OEA;
- rediseñar el papel del grupo de los países amigos dándole un mandato limitado específicamente para el canje de rehenes por prisioneros, y pidiéndole a Brasil que asuma un rol de liderazgo; y
 - expandir considerablemente la inversión en infraestructura para desarrollo rural, de modo que las alternativas económicas distintas del cultivo de coca, una mayor gobernabilidad y el Estado de derecho puedan servir de base para una seguridad sostenible en los territorios liberados de la presencia de las FARC.

II. EL CANJE DE REHENES POR PRISIONEROS

A. URIBE

El presidente Uribe ha reiterado su compromiso con la liberación de los secuestrados, pero ha sido inflexible frente a la demanda fundamental de las FARC de una zona desmilitarizada (ZDM), o de despeje, en los municipios de Florida y Pradera (departamento del Valle del Cauca) en donde se negociaría el intercambio. Aunque expertos en seguridad consideran que la desmilitarización de los municipios durante un tiempo limitado bajo observación internacional no constituiría un riesgo militar importante¹, el gobierno se niega a aceptar la demanda. Considera que renunciar al control territorial y poner en peligro vidas civiles va en contra de su política de seguridad democrática². La primera campaña electoral de Uribe criticó fuertemente al gobierno de Pastrana por permitir zonas de despeje en las que las FARC nunca cumplieron el requerimiento de “desmilitarización” y, en esencia, se les permitió controlar gran parte del área. Desde entonces se ha opuesto a esas zonas en áreas pobladas, aunque manifestó su voluntad de aceptar áreas más pequeñas para dialogar, bajo el control de la Iglesia o de otra parte neutral.

La presencia de influyentes consorcios agroindustriales en el área, en especial plantas de caña de azúcar cuyos

intereses empresariales se podrían ver afectados, también ha influido en la decisión del gobierno de rechazar la posibilidad de una ZDM en Florida y Pradera³. Fuentes cercanas al gobierno dicen que Uribe teme que la zona se percibiría como una derrota política y les volvería a dar a las FARC visibilidad política⁴. El gobierno se niega a darles a las FARC el reconocimiento político que demandan. Uribe, quien continúa considerando a las FARC como un “grupo terrorista”, ha defendido sistemáticamente la idea de que Colombia es una democracia en la que cualquier grupo político no violento tiene la opción de buscar el poder mediante una actividad política pacífica, lo cual elimina la justificación de recurrir a la revolución armada⁵. Además, el gobierno de Uribe percibe la búsqueda de reconocimiento político de las FARC, no simplemente como una manera de recuperar algo de legitimidad, sino también como parte de su “plan estratégico” para desestabilizar al gobierno mediante una acción militar y política combinada⁶.

El clima político nacional ha reforzado la postura del gobierno. El 4 de febrero de 2008, más de cuatro millones de personas marcharon en contra de las FARC. El rechazo de la población en general a las FARC ha sido reconocido por todas las fuerzas políticas. Una facción importante del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA) ha denunciado las prácticas inhumanas de las FARC y ha tomado clara distancia de la insurgencia, a la que no reconoce como una fuerza de izquierda legítima⁷. El Partido Liberal de oposición y, desde luego, los partidos de la coalición uribista también han expresado su rechazo a las FARC como fuerza beligerante y han acogido con beneplácito las propuestas del gobierno

³ Entrevista telefónica de Crisis Group, Bogotá/Cali, 8 de abril de 2008; entrevista de Crisis Group, Bogotá, 9 de abril de 2008. El gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, y el ministro de Agricultura, Andrés Arias, ambos uribistas, han lanzado una fuerte campaña en contra de una zona desmilitarizada, argumentando que perjudicaría el desarrollo económico de la región.

⁴ Entrevista de Crisis Group, ex asesor de paz, Bogotá, 19 de febrero de 2008.

⁵ “En otros países latinoamericanos las guerrillas combatieron dictaduras y no se financiaron del narcotráfico ... cualquier uso de fuerza por razones ideológicas, políticas, religiosas, contra una democracia, es terrorismo ... además estos grupos secuestran, estos grupos reclutan niños, asesinan niños,... [y] siembran minas antipersonas”, rueda de prensa de los presidentes Álvaro Uribe Vélez y José Luis Rodríguez Zapatero, SNE, 23 de enero de 2008.

⁶ Entrevista de Crisis Group, oficial de inteligencia, Bogotá, 22 de febrero de 2008.

⁷ Entrevista de Crisis Group, congresista, Bogotá, 17 de febrero de 2008.

¹ Entrevistas de Crisis Group, ex asesor de paz, Bogotá, 19 de febrero de 2008, y experto en seguridad, Bogotá, 20 de febrero de 2008.

² “Farc buscan una salida digna, dice Comisionado”, *Colprensa*, 20 de marzo de 2008.

para avanzar hacia un canje de rehenes por prisioneros⁸. Incluso las familias de las víctimas, que en ocasiones anteriores sólo criticaban al gobierno por no facilitar un intercambio, ahora también están manifestando su frustración con las FARC⁹.

Contra este telón de fondo, Uribe ha buscado fórmulas para un canje de secuestrados por prisioneros que minimice cualquier ganancia política para las FARC. El 7 de diciembre de 2007, dos semanas después de haber desautorizado al presidente Chávez de Venezuela como mediador designado¹⁰, aceptó la propuesta de la Iglesia católica de establecer una zona de encuentro (ZDE) –unos 150 kilómetros cuadrados en un área escasamente poblada en donde no se requeriría retirar tropas del ejército o la policía– para las negociaciones. Fuentes cercanas al gobierno dicen que Uribe está dispuesto a reconsiderar el tamaño y la ubicación de la zona, y que incluso aceptaría que los representantes de las FARC porten armas durante las conversaciones, siempre y cuando su visibilidad nacional e internacional durante el proceso sea limitada¹¹.

A petición del gobierno, Francia, Suiza y España¹² aceptaron apoyar la propuesta de la Iglesia, pero están menos comprometidos como facilitadores oficiales que en ocasiones anteriores¹³. España ya no tiene un emisario especial para el intercambio y se ha mostrado renuente a comprometerse plenamente con esfuerzos con pocas posibilidades de éxito¹⁴. Los emisarios de Francia y Suiza siguen activos, pero sus gobiernos han dejado en claro que creen que sin más espacio para maniobrar y posiblemente sin el apoyo de la senadora Piedad Córdoba y el gobierno venezolano, es improbable que las FARC acepten la ZDE¹⁵.

En comunicaciones recientes, las FARC rechazan a la Iglesia y a España como facilitadores válidos por aliarse supuestamente con el gobierno de Uribe y criticar al gobierno venezolano. Estos señalamientos reducen aún más la probabilidad de adoptar la propuesta de una ZDE, pero ya antes las FARC han cambiado su posición sobre ese tipo de asuntos casi de la noche a la mañana, dependiendo de cómo evalúen la posibilidad de obtener una ganancia política. Es factible que si Venezuela apoya la participación de la Iglesia, vuelvan a cambiar de opinión¹⁶.

⁸ “‘Piedad Córdoba ha sido fundamental para la liberación de las secuestradas’; César Gaviria”, *El Espectador*, 18 de febrero de 2008.

⁹ El 6 de marzo de 2008, las organizaciones de víctimas, junto con organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos humanos y con el apoyo del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), así como de líderes de otros partidos, organizaron una marcha contra el paramilitarismo que fue mucho más pequeña que la marcha del 4 de febrero pero aun así reunió a varios cientos de miles de personas en unas veinte ciudades. Después de la marcha, los grupos de derechos humanos colombianos han denunciado amenazas por parte de nuevos grupos armados ilegales, allanamientos de sus oficinas y el asesinato de varios activistas.

¹⁰ Véase la sección II.B., más adelante.

¹¹ Entrevista de Crisis Group, fuente que ha participado en esfuerzos por lograr un intercambio, Bogotá, 11 de febrero de 2008.

¹² En octubre de 2005, el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo viajó a Europa y pidió el establecimiento de una Comisión de Facilitación Internacional conformada por Francia, España y Suiza, con la misión de diseñar una propuesta para la negociación de un intercambio de rehenes por prisioneros. En diciembre de 2005, el gobierno acogió la propuesta de la comisión de crear un “sistema de seguridad” para una reunión entre el gobierno y las FARC, en una zona de 180 km en Bolo Azul (Valle), por espacio de 45 días. Durante este período, delegados internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja asegurarían el área y proveerían desplazamiento seguro para los delegados gubernamentales e insurgentes. “Sistema de Seguridad para un Encuentro Humanitario en la Cordillera Central”, documento interno, diciembre de 2005. Las FARC rechazaron la oferta aduciendo que nunca la recibieron.

¹³ Entrevistas de Crisis Group, fuentes que han participado en esfuerzos para lograr un intercambio, Bogotá, 8, 13 de febrero de 2008.

¹⁴ Entrevista de Crisis Group, fuente que ha participado en esfuerzos para lograr un intercambio, Bogotá, 8 de febrero de 2008.

¹⁵ Entrevistas de Crisis Group, fuentes que han participado en esfuerzos para lograr un intercambio, Bogotá, 8, 13 de febrero de 2008.

¹⁶ La posibilidad de que España desempeñe un papel parece mucho menos probable, dada la confrontación entre el rey Juan Carlos y Chávez en noviembre de 2007. “Spain’s king to Chavez: ‘Just shut up’”, Agencia France-Presse, 10 de noviembre de 2007, en <http://afp.google.com/article/ALeqM5jRV9BQppSHTkw7DzwfFaulNrYcCg>.

Si el gobierno y las FARC lograran llegar a un acuerdo en torno al canje de rehenes por prisioneros – con base en municipios desmilitarizados o regiones con escasa población y con poca o ninguna presencia militar y policiva– un beneficio colateral sería la presión inmediata que se ejercería sobre el grupo rebelde más pequeño, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para que aceptara un acuerdo similar. Según estimaciones gubernamentales e independientes, dicho grupo podría tener todavía en su poder a entre 200 y 400 secuestrados¹⁷. De modo similar, si se produjera un canje con el ELN, eso presionaría a las FARC a aceptar un acuerdo similar.

Funcionarios del gobierno argumentan que la creciente presión militar y el estado de salud de los rehenes terminarán por dejar a las FARC sin otra opción distinta de la liberación unilateral¹⁸. Como incentivo, el gobierno expidió un decreto el 27 de marzo facultando la liberación de los insurgentes encarcelados, incluidos los responsables de crímenes atroces como el secuestro, a cambio de la liberación unilateral de secuestrados¹⁹. Al mismo tiempo, Uribe ha ordenado a las fuerzas de seguridad que ubiquen y rodeen los campamentos en donde se mantiene a los secuestrados²⁰. Esta es una decisión peligrosa que trae a la memoria recuerdos de operaciones de rescate militar fallidas, como la que se realizó en 2003

resultando en el asesinato de un ex ministro de Defensa y el gobernador en ejercicio del departamento de Antioquia por sus captores. También les podría dar a los insurgentes una excusa para culpar al gobierno si algún secuestrado muriera por la razón que fuere como resultado de la maniobra militar.

El 30 de marzo, a la luz de los rumores sobre el crítico estado de salud de Ingrid Betancourt, el gobierno autorizó una misión humanitaria conformada por representantes de Francia, España y Suiza para suministrarle asistencia médica y posiblemente negociar su liberación unilateral. Sin embargo, el 8 de abril las FARC rechazaron la misión y denunciaron su conformación como un intento del gobierno de presionar nuevas liberaciones unilaterales²¹. Los insurgentes reiteraron su demanda de desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera como única manera de avanzar hacia la negociación del canje de secuestrados por prisioneros.

B. CHÁVEZ Y LAS FARC

Después de su precipitada destitución como mediador en noviembre de 2007, Chávez siguió desempeñando ese papel pero con carácter no oficial. Debido a sus contactos desde hace bastante tiempo, que se remontan a las negociaciones con Pastrana en el período 1998-2002²², los insurgentes lo perciben como un claro aliado en la lucha contra el gobierno de Uribe. La liberación unilateral de seis rehenes y las pruebas de supervivencia de numerosos secuestrados pusieron de relieve la importancia que conceden las FARC a la relación con el gobierno venezolano. Los insurgentes no sólo creen que el “prestigio que ha ganado en el continente” es un factor clave en la obtención de apoyo internacional para el canje²³, sino, quizás más importante aún, perciben su participación como un elemento crucial para reducir la presión que el gobierno de Uribe está ejerciendo sobre ellos y para alcanzar su meta estratégica de reconocimiento político.

¹⁷ A la luz de la aparente debilidad militar del ELN, es por lo menos improbable que tenga la capacidad de mantener 400 secuestrados, como dice el gobierno. “Proceso de Diálogo Gobierno Nacional – Ejército de Liberación Nacional, ELN, 2005-2007”, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Bogotá, agosto de 2007; entrevista de Crisis Group, analista de paz independiente, Bogotá, 15 de abril de 2008. Para antecedentes, véase Crisis Group, Boletín informativo sobre América Latina N°16, *Colombia: ¿Se está avanzando con el ELN?*, 11 de octubre de 2007.

¹⁸ Se afirma que la guardia de cada rehén exige hasta doce combatientes, lo que resulta costoso en materia de suministros y medicinas. Entrevista de Crisis Group, combatiente desmovilizado, Bogotá, 18 de febrero de 2008.

¹⁹ Decreto presidencial N° 880, del 27 de marzo de 2008. La propuesta es legalmente discutible. Según la Fiscalía General de la Nación, la liberación de insurgentes encarcelados sólo se consideraría después de que las FARC hubieran liberado a los rehenes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha objetado la liberación de violadores de los derechos humanos sin tener en cuenta los derechos de las víctimas a la reparación, la verdad y la reconciliación. “Principios orientadores para definir cuáles condenados pueden recibir beneficios en virtud de Acuerdos en el marco del Decreto N° 880 del 27 de marzo de 2008”, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, 28 de marzo de 2008.

²⁰ “Palabras del Presidente Álvaro Uribe, Consejo Comunal de San José del Guaviare”, SNE, 29 de marzo de 2008.

²¹ Tras el rechazo de las FARC, la misión humanitaria francesa se marchó de Colombia. “Comunicado del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP sobre la misión médica francesa”, FARC-EP, 8 de abril de 2008.

²² Entrevistas de Crisis Group, analistas, diplomáticos y oficiales del ejército retirados, Caracas, 31 de marzo-3 de abril de 2008.

²³ “FARC: factible, cita entre Chávez y Marulanda”, *La Jornada*, 5 de septiembre de 2007.

El principal interés de las FARC en materia de canje es político²⁴. Su exigencia de desmilitarización de dos municipios tiene dos metas esenciales: ante todo, forzar a Uribe a romper su promesa de no reproducir la experiencia del gobierno de Pastrana con una ZDM; y en segundo lugar, recuperar la visibilidad nacional e internacional que perdió desde 2002²⁵. Además, las FARC perciben el canje como una manera de promover su retiro de las listas internacionales de terrorismo y obtener reconocimiento como fuerza beligerante.

Consciente de estos objetivos, Chávez propuso el reconocimiento político como un paso clave hacia el intercambio. Después de la liberación unilateral de los primeros dos rehenes el 10 de enero, el presidente venezolano pidió a la comunidad internacional retirar a las FARC de sus listas de terroristas y otorgarle el estatus de actor beligerante en el conflicto armado colombiano²⁶. Según argumentó, esto forzaría de inmediato a los insurgentes a respetar el derecho internacional humanitario, liberar a los rehenes y dejar de secuestrar, y posiblemente también abriría la puerta a conversaciones de paz²⁷. Miembros de la coalición chavista también presentaron una moción en la Asamblea Nacional de Venezuela, apoyando su

llamado al gobierno colombiano para que les otorgaran a las FARC y al ELN estatus de beligerancia²⁸.

Las FARC acogieron bien la propuesta de Chávez²⁹, pero pronto quedó claro que la comunidad internacional no apoyaría el reconocimiento político irrestricto a menos que las FARC liberaran primero a los secuestrados y cesaran todas las prácticas proscritas por el derecho internacional humanitario³⁰. Así pues, pese a reconocer que la liberación unilateral sería un gesto importante, Francia, España, Suiza y la UE reiteraron su compromiso de no otorgar a las FARC estatus de beligerancia ni retirarlas de sus listas de terroristas³¹. De hecho, el paso de un apoyo velado a las FARC a través de la mediación humanitaria a un respaldo político público tendiente a promover el estatus del grupo guerrillero como actor beligerante legítimo, ha sido contraproducente para Chávez.

Tras la liberación de otros cuatro rehenes el 27 de febrero, las FARC anunciaron el fin de las liberaciones unilaterales y nuevamente pidieron una ZDM³². El gobierno de Uribe reconoció la liberación unilateral como un paso positivo, pero se negó a considerar la demanda. Chávez criticó la postura del gobierno y propuso el establecimiento de un grupo *ad hoc* de

²⁴ En 2004, las FARC percibían el intercambio como una manera de recuperar a un gran número de sus comandantes de nivel medio y reforzar su cadena de mando. Crisis Group, Boletín informativo sobre América Latina N°4, *Rehenes por prisioneros: ¿Un camino hacia la paz en Colombia?*, 8 de marzo de 2004. Sin embargo, fuentes que han participado en esfuerzos para lograr un intercambio creen que estos argumentos han perdido fuerza y que ahora las FARC podrían considerar problemático el reintegro de insurgentes encarcelados, debido a la posibilidad de que actúen como informantes. Entrevista de Crisis Group, fuente que ha participado en esfuerzos para lograr el intercambio, Bogotá, 11 de febrero de 2008.

²⁵ Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Bogotá, 20 de febrero de 2008.

²⁶ Esa liberación fue precedida por semanas de esfuerzos aparentemente improvisados y reveses de Chávez, incluido el descubrimiento, por parte del gobierno colombiano, de que Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, una de las dos mujeres liberadas, que nació en cautiverio, ya se encontraba bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El presidente Uribe ha rechazado sistemáticamente la posibilidad de reconocer políticamente a las FARC como fuerza beligerante en un conflicto armado genuino, y por el contrario insiste en referirse al movimiento como un simple grupo armado ilegal y terrorista.

²⁷ El argumento de Chávez falla en la medida en que las FARC tienen la obligación de regirse por el derecho internacional humanitario, independientemente de si se le concede el estatus de beligerancia o no. Aló Presidente N°300, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 13 de marzo de 2008.

²⁸ “AN respalda propuesta de paz del presidente Chávez para Colombia”, Asamblea Nacional, 11 de enero de 2008, disponible en www.asambleanacional.gov.ve/publico/noticias/det_noticias.php?co=918.

²⁹ Según las FARC, la propuesta es un paso “en el camino correcto, porque remueve inamovibles y dinamiza la búsqueda de una solución política al largo conflicto social y armado que vive Colombia”, “Comunicado de las FARC sobre la liberación de los congresistas”, Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, 27 de febrero de 2008.

³⁰ Entrevistas de Crisis Group, fuentes que han participado en esfuerzos para lograr el intercambio, Bogotá, 7, 13 de febrero de 2008.

³¹ España, Francia, Suiza y la Unión Europea manifestaron su apoyo al gobierno colombiano y reiteraron su interés en la rápida liberación de los rehenes. Francia y Suiza pidieron más espacio de maniobra en sus esfuerzos por facilitar un canje de rehenes por prisioneros con las FARC. “Uribe dejó a las Farc contra las cuerdas, pero tendría que ceder para mediación de Francia y Suiza”, *El Tiempo*, 26 de enero de 2008.

³² Según las FARC, su “voluntad para llegar a un acuerdo de canje con el gobierno está rubricada en la liberación unilateral que hiciéramos de 304 militares y policías capturados en combate, de Clara Rojas y Consuelo de Perdomo, de los cuatro congresistas y los policías del Putumayo, entre otros... Ahora debe seguir el despeje militar de Pradera y Florida”, Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, comunicado, 27 de febrero de 2008.

países amigos para presionarlo a abandonar sus exigencias y buscar nuevas fórmulas viables para un lugar de negociación³³.

Francia, Brasil, Cuba, Ecuador, Argentina y Suiza han aceptado informalmente hacer parte del nuevo grupo *ad hoc*, pero casi todos (a excepción de Cuba y posiblemente Ecuador) se han enfocado exclusivamente en el logro del canje humanitario y no han apoyado los demás objetivos de Chávez³⁴. Pese a tener un papel no muy claramente definido, el concepto del grupo le ha dado algo de legitimidad a los esfuerzos de facilitación de Chávez y lo ha protegido de ciertas críticas de sesgo a favor de las FARC³⁵. Chávez espera que el grupo también sirva de trampolín para posibles conversaciones futuras y para buscar soluciones distintas de la lucha militar.

Sin embargo, la relación cada vez más estrecha de Chávez con las FARC y su apoyo público al grupo han hecho que a Uribe le preocupe su participación. La animosidad de Chávez contra el gobierno colombiano tras haber sido destituido como mediador formal llevó a Uribe a denunciar sus esfuerzos como “legitimadores”, en vez de como “mediadores contra amenazas terroristas”³⁶. Fuentes cercanas al gobierno de Colombia piensan que las liberaciones unilaterales de enero y febrero pueden haber sido parte de una estrategia previamente arreglada entre Chávez y los insurgentes para presionar al gobierno a hacer concesiones³⁷.

Después del ataque de tropas colombianas en territorio ecuatoriano el 1° de marzo de 2008, que resultó en la muerte de Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC, el gobierno colombiano manifestó que había recuperado archivos de computadores portátiles capturados que corroboraban su información con respecto a los vínculos entre funcionarios del gobierno venezolano y los insurgentes³⁸. Los documentos son comunicaciones de correo electrónico presuntamente entre altos miembros de las FARC y funcionarios venezolanos y ecuatorianos. Aunque el contexto no siempre es claro, funcionarios de las fuerzas de seguridad colombianas aseguran que los documentos demuestran que miembros del gobierno de Chávez y de las FARC han estado trabajando en una estrategia que incluye cooperación militar, financiera y política contra el gobierno de Uribe³⁹. Si bien Chávez ha denunciado las acusaciones como un intento de desacreditar sus esfuerzos humanitarios, los informes han afectado aún más su postura internacional y sin duda dificultan su participación como facilitador.

Al gobierno colombiano le preocupa la posibilidad de que Chávez utilice el apoyo internacional que logró gracias a sus esfuerzos humanitarios para aislarlo en

secuestrados que todavía están en cautiverio, habría seis civiles, que serían dos ex políticos, Ingrid Betancourt y los tres ciudadanos estadounidenses. Los demás serían policías y militares capturados en combate. Entrevistas de Crisis Group, fuentes que han participado en esfuerzos para lograr el intercambio, Bogotá, 8, 11 de febrero de 2008.

³⁸ El gobierno colombiano le pidió a una comisión de la Interpol que estableciera la autenticidad de los documentos para mediados de mayo. Varios diplomáticos estadounidenses insisten en que los documentos sustentan plenamente las acusaciones de Colombia contra Chávez. Aunque afirman que los documentos también reflejan las comunicaciones entre el gobierno de Ecuador y altos miembros de las FARC, establecen una distinción con respecto a la naturaleza de la relación entre las FARC y funcionarios ecuatorianos, tanto en el pasado como durante el gobierno de Correa. También señalan la dificultad de llegar hasta el área fronteriza, la capacidad militar limitada de Ecuador y el deseo del gobierno ecuatoriano de tomar distancia del conflicto colombiano, y dicen que las más recientes comunicaciones se relacionaban con los esfuerzos internacionales para lograr la liberación de los secuestrados. Entrevistas de Crisis Group, alto funcionario de la embajada de Estados Unidos, Bogotá, 4 de abril de 2008, y funcionario del Departamento de Estado, Washington, D.C., 27 de marzo de 2008.

³⁹ La policía colombiana interpreta las comunicaciones internas de las FARC como un indicio de que Chávez había acordado hacer una donación de US\$300 millones y suministrar armamento viejo a las FARC, aunque existe ambigüedad sobre las cantidades. Archivo de documento extraído del computador de Raúl Reyes, *El Tiempo*, 3 de marzo de 2008, en www.eltiempo.com/conflicto/noticias/ARCHIVO/ARCHIVO-3985321-0.pdf.

³³ “Chávez dice ‘fuerzas’ humanitarias cambiarán postura ‘inamovible’ de Uribe”, EFE, 28 de febrero de 2008.

³⁴ La inclusión de una comisión internacional de amplio espectro para emprender la “Operación Emmanuel” a fines de diciembre de 2007 había creado el marco. Luego, en la reunión cumbre entre los presidentes Sarkozy de Francia y Lula de Brasil, celebrada en Guyana el 7 de febrero de 2008, se planteó más a fondo la idea de consolidar el grupo. El grupo funcionaría de modo similar al Grupo de Contadora que se creó para apoyar los procesos de paz en Centroamérica. “Presidente Chávez propone que emisarios de Gobierno y las Farc se reúnan con grupo de países amigos”, *El Tiempo*, 28 de febrero de 2008.

³⁵ Entrevista de Crisis Group, fuente que ha participado en esfuerzos para lograr el intercambio, Bogotá, 11 de febrero de 2008.

³⁶ “Declaración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, desde Calamar, Bolívar”, SNE, 25 de noviembre de 2007.

³⁷ Se dijo que la estrategia implicaba la liberación unilateral de los “secuestrados civiles” a cambio del lanzamiento de una campaña internacional tendiente a lograr el reconocimiento político de las FARC, seguida por el establecimiento del grupo de países *ad hoc* para presionar al gobierno a aceptar una zona desmilitarizada para la liberación de “policías y militares secuestrados”. De los 39

la región. Después del ataque contra el campamento de Reyes, Ecuador y Venezuela denunciaron las operaciones militares colombianas como una amenaza inminente a sus territorios. Por consiguiente, el gobierno teme que el grupo *ad hoc* pueda convertirse cada vez más en un foro regional en el que se critique su política de seguridad⁴⁰. Con la postergación, al parecer indefinida, del Tratado de Libre Comercio en el Congreso de Estados Unidos⁴¹, también le preocupa el aislamiento económico. El gobierno teme que las diferencias con Chávez y el grupo *ad hoc* tengan consecuencias comerciales, sobre todo con Venezuela y Ecuador, que son, respectivamente, el segundo y tercer socios comerciales de Colombia⁴².

Si bien Brasil, Ecuador y Argentina siguen apoyando al grupo *ad hoc*, cada cual tiene su propia opinión sobre cuál debería ser el papel de dicho grupo. Aunque la crisis diplomática inicial ha amainado, la persistente denuncia de Bogotá de vínculos entre el gobierno de Correa y las FARC ha mantenido en un nivel alto la tensión con Ecuador⁴³. Como resultado, Ecuador está percibiendo al grupo como una manera de buscar respaldo político a sus denuncias sobre el flujo de refugiados y los daños causados por las campañas de fumigación aérea, así como sobre otros efectos transfronterizos derivados de la estrategia militar de Uribe. Brasil cree que el grupo debe servir como plataforma para recomponer las relaciones diplomáticas entre Colombia y sus vecinos. En privado, ha enfatizado la importancia de lograr un intercambio de secuestrados por prisioneros, ha reiterado que la solución del conflicto colombiano debe ser política y ha manifestado su gran preocupación por el ataque de

Colombia contra el campamento de las FARC en Ecuador⁴⁴.

Francia sigue percibiendo a Chávez como un actor importante en su empeño por lograr la liberación de Ingrid Betancourt. La prioridad que el presidente Sarkozy le ha dado a los esfuerzos por conseguir la liberación de Betancourt ha instado a su gobierno a respaldar el papel del presidente venezolano como facilitador⁴⁵. Francia ha promovido la consolidación del grupo *ad hoc* y le ha pedido a Uribe considerar la posibilidad de restituir a Chávez como facilitador oficial⁴⁶. Sin embargo, las noticias sobre el estado de salud cada vez más deteriorado de Betancourt ha instado al gobierno francés a recurrir también a otros canales. Sarkozy ha tratado de presionar directamente a las FARC al señalar públicamente al comandante en jefe Manuel Marulanda como el único responsable de su muerte. Sin embargo, el rechazo de las FARC a la improvisada misión humanitaria enviada el 30 de marzo podría instar a Francia a recurrir nuevamente a Chávez⁴⁷.

Estados Unidos ha manifestado poco interés en apoyar los esfuerzos de Chávez. Aunque algunos funcionarios han dicho que no se oponen a ningún esfuerzo verosímil para liberar a los rehenes, incluidos los tres ciudadanos estadounidenses que las FARC tienen en cautiverio desde 2003⁴⁸, es muy improbable que Washington acepte una propuesta que no haya sido previamente aprobada por Uribe⁴⁹. Como respuesta a la petición de las FARC de que se libere a alias "Simón Trinidad" y a alias "Sonia", condenados a penas de prisión de 60 y 17 años respectivamente en Estados Unidos⁵⁰, a cambio de la liberación de los tres

⁴⁰ Entrevista de Crisis Group, especialista en seguridad, Bogotá, 20 de febrero de 2008.

⁴¹ "House Delays Deliberation of Colombia Pact", *The Washington Post*, 10 de abril de 2008.

⁴² Durante la reciente crisis diplomática, el gobierno venezolano restringió las importaciones de Colombia. Varias empresas brasileñas y argentinas se apresuraron a reemplazar las importaciones colombianas. Entrevista de Crisis Group, congresista, Bogotá, 17 de febrero de 2008.

⁴³ La muerte del ecuatoriano Franklin Aisalia en el ataque al campamento de Raúl Reyes generó una nueva controversia. Mientras el gobierno ecuatoriano asegura que el asesinato de uno de sus ciudadanos por un gobierno extranjero es una violación grave independientemente de las circunstancias, el gobierno colombiano dice que informes de inteligencia confirmaron que Aisalia era miembro de las FARC y que su presencia en un campamento "terrorista" lo convertía en un objetivo legítimo. El 27 de marzo de 2008, el cuerpo de Aisalia se repatrió a Ecuador.

⁴⁴ Entrevistas de Crisis Group, altos funcionarios del gobierno de Brasil, Brasilia, 11 y 13 de marzo de 2008.

⁴⁵ Tradicionalmente, el gobierno francés ha favorecido una posición pragmática. En diciembre de 2003 intentó negociar la liberación de Betancourt sin el consentimiento del gobierno colombiano. Se cree que a fines de 2004 también estableció contacto con las FARC en Venezuela, sin que el gobierno colombiano se enterara en su momento.

⁴⁶ "Uribe admite que solicitó al canciller francés Bernard Kouchner no analizar temas sobre Venezuela", *El Tiempo*, 22 de febrero de 2008.

⁴⁷ "Sarkozy: 'Liberen a Ingrid Betancourt'", BBC Mundo, 1° de abril de 2008.

⁴⁸ "EE.UU. apoya iniciativa creíble de canje", *El Universal*, 14 de febrero de 2008.

⁴⁹ Inclusive mientras el presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba gestionaban la liberación de los rehenes, el gobierno de Estados Unidos pidió en extradición al guerrillero de las FARC Herminio Cuevas, alias 'Mincho', con base en cargos de narcotráfico. Fue extraditado el 22 de septiembre de 2007.

⁵⁰ "Reyes: Simón como Sonia son parte sustancial del canje", ANNCOL, 11 de febrero de 2007. El 4 y el 30 de

ciudadanos estadounidenses, los departamentos de Estado y de Justicia han dicho que estarían dispuestos a considerar una reducción de las sentencias sólo después de liberados los secuestrados⁵¹. El interés inicial que manifestaron algunos miembros demócratas del Congreso de reunirse con Chávez y actuar como facilitadores para la liberación de los tres estadounidenses cautivos ha menguado tras las denuncias sobre los vínculos entre Chávez y las FARC que se evidenciarían en el computador de Reyes⁵².

III. ¿HACIA UNA VICTORIA MILITAR?

Los recientes ataques militares contra la dirigencia de las FARC y otros indicios de debilidad de los rebeldes han llevado al gobierno y a las fuerzas de seguridad a afirmar que Colombia se acerca al “fin del fin” de las FARC⁵³. El gobierno ha manifestado su intención de continuar e incluso aumentar la presión militar, para forzar a las FARC a sentarse a la mesa de negociación⁵⁴. También ha expresado su deseo de utilizar la Ley de Justicia y Paz como marco legal para sacar a las FARC del campo de batalla, lo cual implica que los jefes del movimiento guerrillero posiblemente pagarían como máximo ocho años de cárcel⁵⁵. Sin embargo, es claro que Uribe espera propinar una derrota militar contundente a las FARC y lograr su rendición en circunstancias muy distintas de las que rodearon el desarme y la desmovilización

octubre de 2007 la senadora Piedad Córdoba se reunió con Sonia y con Simón Trinidad respectivamente. Supuestamente ambos aceptaron no ser obstáculo para el canje. Piedad Córdoba, “Informe de gestión sobre acuerdo humanitario”, 28 de noviembre de 2007.

⁵¹ Entrevistas de Crisis Group, observador extranjero, Bogotá, 8 de febrero de 2008, y fuente que ha participado en esfuerzos para lograr el intercambio, Bogotá, 11 de febrero de 2008.

⁵² El gobierno de Estados Unidos había enviado emisarios para facilitar la liberación de los ciudadanos estadounidenses; entrevista de Crisis Group, fuente que ha participado en esfuerzos para lograr el intercambio, Bogotá, 8 de febrero de 2008.

⁵³ “Estamos en el fin del fin, dice el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares”, *Revista Credencial*, 6 de julio de 2007.

⁵⁴ Entrevista de Crisis Group, ex asesor de paz, Bogotá, 19 de febrero de 2008. Entrevista de Crisis Group, fuente que ha participado en esfuerzos para lograr el intercambio, Bogotá, 11 de febrero de 2007. Entrevista de Crisis Group, experto en las FARC, Bogotá, 8 de febrero de 2008.

⁵⁵ La Ley de Justicia y Paz se promulgó inicialmente con el fin de proveer un marco para gestionar la desmovilización de los paramilitares de derecha.

del grupo paramilitar AUC. Si bien se las consideraba formalmente como un grupo armado ilegal culpable de atrocidades y narcotráfico, las AUC se percibían como aliadas de las fuerzas armadas contra los insurgentes y recibieron ayuda directa, aunque ilícita, de algunos organismos de seguridad.

La persistente ofensiva militar del gobierno desde 2002 comienza a producir resultados tangibles⁵⁶. Si bien las operaciones iniciales forzaron a las FARC a un “repliegue estratégico” y les impidieron lanzar ataques grandes y acumular fuerzas⁵⁷, el gobierno cree que sus ataques recientes están produciendo un colapso interno. La muerte sin precedentes de dos miembros del Secretariado de las FARC, Reyes el 1° de marzo e Iván Ríos el 7 de marzo, constituyen hitos en el prolongado conflicto. Estas muertes estuvieron precedidas por golpes contra otros comandantes importantes, que tuvieron como resultado las muertes de “J.J.” el 6 de junio de 2007, el “Negro Acacio” el 1° de octubre de 2007 y “Martín Caballero” el 24 de octubre de 2007⁵⁸.

Se cree que la otrora estable estructura de mando de las FARC, está fallando. El asesinato de Ríos por sus propios hombres es un claro reflejo de la pérdida de cohesión interna. Por otra parte, fuentes de los organismos de

⁵⁶ Después de las operaciones Libertad I y II en Cundinamarca en 2002 y 2003, la operación Jorge Mora en el Putumayo en 2004 y el Plan Patriota, lanzado en 2004 con énfasis en los departamentos surorientales con amplia presencia de las FARC, el gobierno lanzó grandes ofensivas en el departamento del Guaviare en 2007 y en la actualidad está avanzando hacia el departamento del Vaupés. Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad, Bogotá, 20 de febrero de 2007. Con el fin de continuar las operaciones y mantener el control territorial, la nueva política de consolidación contempla un incremento de más de 14.500 hombres en el ejército, más de 2.400 en la armada, más de 20.000 agentes de policía y más de 850 efectivos en la fuerza aérea. “Política de Consolidación de la Seguridad Democrática: Fortalecimiento de las Capacidades del Sector Defensa y Seguridad”, Departamento Nacional de Planeación – CONPES, 26 de febrero de 2007.

⁵⁷ Las FARC emprendieron un repliegue estratégico en la medida en que las fuerzas de seguridad empezaron a lanzar ofensivas amplias y sostenidas. Los insurgentes se desplazaron de las áreas cercanas a los centros urbanos a zonas rurales más apartadas, con el ánimo de reagruparse y lanzar ataques aislados. En general, las FARC han pasado de una guerra de movimiento, en la que grandes bloques lanzaban ataques y consolidaban territorio, a una guerra de guerrillas más tradicional, con tácticas de ataque y retirada en grupos más pequeños.

⁵⁸ “J.J.” era el líder del frente urbano Manuel Cepeda Vargas; el “Negro Acacio” era líder del Frente 16, que opera en Vichada; y “Martín Caballero” era líder del Frente 37.

seguridad dicen que la falta de comunicación interna debido a la presión militar y la vigilancia técnica⁵⁹ y la desmovilización cada vez mayor de comandantes experimentados de rango medio también están afectando la cadena de mando⁶⁰. Funcionarios del gobierno creen que, en la medida en que se vaya perdiendo la moral se ampliarán las fisuras políticas e ideológicas en la comandancia de las FARC⁶¹, lo cual fomentará luchas de poder que podrían inducir una lenta fractura en la organización, o incluso una implosión⁶².

Según fuentes de las fuerzas de seguridad, las FARC también son cada vez menos operacionales. Según estimaciones del gobierno, de los más de 18.900 combatientes que tenía en 2002 ha bajado a entre 9.000 y 11.000 en 2007, con sólo diez de sus 71 frentes y unidades regularmente activas⁶³. Así mismo, su financiación es cada vez más débil, incluso en las zonas en donde los frentes han tenido tradicionalmente un sólido flujo de caja, como los departamentos de Norte de Santander y Guaviare⁶⁴. Fuentes de inteligencia creen que las FARC tienen presencia en tan sólo el 50 por ciento de las áreas en donde se cultiva coca en la actualidad, en comparación

con el 70 por ciento de dichas áreas en 2002. Esto representa una importante disminución de su control sobre las operaciones de tráfico de droga que siguen siendo su principal fuente de ingresos⁶⁵.

El gobierno confía en que su política de consolidación de la seguridad, lanzada en 2007, impedirá cualquier posibilidad de resurgimiento de las FARC. Aunque el mejoramiento en poder aéreo, fuerzas especiales, inteligencia y coordinación entre las fuerzas de seguridad le ha permitido al gobierno propinar fuertes golpes a los rebeldes⁶⁶, los funcionarios saben que los avances en materia de seguridad serán únicamente temporales si no logran consolidar el control del territorio⁶⁷. Por consiguiente, la nueva política se enfoca en expandir la presencia de fuerzas de seguridad en regiones remotas, con el fin de sentar las bases para la llegada de instituciones civiles del Estado y programas de inversión social integral, como inversión en infraestructura rural y promoción de alternativas económicas distintas del cultivo de coca, así como el restablecimiento del Estado de derecho⁶⁸. Ejemplo de

⁵⁹ El asesinato de once diputados regionales secuestrados, el 18 de junio de 2007, y el anuncio de la liberación de Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, cuando ya no estaba en cautiverio se citan como casos recientes de fallas de comando y control. Entrevista de Crisis Group, oficial de inteligencia, Bogotá, 22 de febrero de 2008.

⁶⁰ El tiempo promedio que los combatientes desmovilizados han pasado en la organización ha aumentado de trece años en 2002 a veinte años en 2007. Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Bogotá, 27 de febrero de 2008. A comienzos de 2007 el Ministerio de Defensa estableció un grupo de trabajo especial conformado por ex combatientes y oficiales de inteligencia, con la misión de ponerse en contacto con comandantes de rango medio e incitarlos a desertar. Entrevista de Crisis Group, combatiente desmovilizado, Bogotá, 18 de febrero de 2008.

⁶¹ Según fuentes de inteligencia, ha habido discusiones entre los comunistas ortodoxos y los que apoyan una ideología bolivariana como la que propugna el presidente Chávez en Venezuela; entrevista de Crisis Group, oficial de inteligencia, Bogotá, 26 de febrero de 2008.

⁶² Entrevistas de Crisis Group, combatiente desmovilizado, Bogotá, 18 de febrero de 2008, y congresista, Bogotá, 19 de febrero de 2008.

⁶³ Entrevista de Crisis Group, oficial de inteligencia, Bogotá, 22 de febrero de 2008.

⁶⁴ Entrevistas de Crisis Group, experto en seguridad, Bogotá, 20 de febrero de 2008, y alto funcionario del gobierno, Bogotá, 27 de febrero de 2008. Un alto funcionario del gobierno colombiano ha señalado que existe información en el sentido de que, en ciertas zonas, las FARC se han visto obligadas a entregar "bonos" para pagos futuros a los cultivadores de coca, debido a problemas de flujo de caja; entrevista de Crisis Group, Bogotá, 17 de abril de 2008.

⁶⁵ Entrevista de Crisis Group, oficial de inteligencia, Bogotá, 22 de febrero de 2008. Las estimaciones del gobierno indican que los ingresos de las FARC se han reducido de más de US\$1.300 millones en 2002 a aproximadamente US\$500 millones en 2007. "Tendencias y resultados 2007", Ministerio de Defensa Nacional, 28 de enero de 2008.

⁶⁶ Desde comienzos de 2007, oficiales de inteligencia han sido entrenados por asesores israelíes sobre la mejor manera de extraer información operacional de los combatientes desmovilizados. Algunos asesores británicos también están ayudando a los organismos de inteligencia. Entrevista de Crisis Group, observador internacional, Bogotá, 8 de febrero de 2008.

⁶⁷ Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Bogotá, 27 de febrero de 2008.

⁶⁸ Algunas de las metas específicas de la política de consolidación entre 2006 y 2010 son: un incremento en el número de estaciones de policía en los distritos rurales, de 51 a 251 para 2010; la promoción de 10.000 deserciones de los grupos armados ilegales; la reducción del número de secuestros extorsivos en un 13,4 por ciento anual, y la disminución de los ataques terroristas en un 8,2 por ciento anual. "Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010", Departamento Nacional de Planeación, diciembre de 2007. La política de consolidación también esboza la implementación de la Doctrina de Acción Integral (DAI), que busca coordinar la acción entre las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales. Con el fin de adelantar la doctrina, el gobierno estableció el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), adscrito a la presidencia, con el fin de que integre la acción de catorce instituciones estatales a nivel municipal. Aunque no tiene una base legal ni un marco institucional adecuado, en la actualidad opera en 51 municipios y planea expandirse a diez más. Como complemento del CCAI, el gobierno también quiere establecer centros regionales de coordinación. El primer proyecto piloto

esto es el ajuste en la asignación de la financiación estadounidense del Plan Colombia⁶⁹, que proveerá más recursos para dichos fines para que se pueda extender bastante más allá del actual objetivo de cerca de 250 corregimientos⁷⁰.

Existen razones para creer que las FARC siguen teniendo cierta capacidad de adaptación y resistencia, por lo menos en el corto a mediano plazo. Como dijo Raúl Reyes en una entrevista poco antes de morir, “nuestros cuadros, nuestro guerrilleros han aprendido mucho de esta confrontación y han adquirido mayor nivel... [la guerrilla] aprende de la experiencia”⁷¹. La presión militar ha forzado a sus unidades a volverse más pequeñas y menos visibles, favoreciendo grupos de entre tres y doce combatientes, a veces vestidos de civil para evitar la detección. Como no pueden lanzar ataques grandes, las unidades se han especializado en el uso de minas antipersona y explosivos, francotiradores y asesinatos selectivos (plan pistola) contra blancos policivos y militares específicos⁷². Las FARC también están realizando más operaciones de inteligencia, y han logrado infiltrar comandos de las fuerzas armadas para obtener información reservada⁷³. Para compensar sus pérdidas, también han empezado a reforzar sus frentes rurales con su milicia urbana⁷⁴.

Las FARC también parecen estar modificando su estrategia militar a largo plazo. En un mensaje reciente a las tropas, el comandante en jefe Marulanda hizo un llamamiento para lanzar una “ofensiva general”

de esta estrategia regional opera en seis municipios del departamento del Meta.

⁶⁹ Véase Crisis Group, Informe sobre América Latina N°26, *La droga en América Latina II: Optimizar las políticas y reducir los daños*, 14 de marzo de 2008, pp. 4-5; 16-18.

⁷⁰ *Ibid.*, pp. 4-5, 16-18.

⁷¹ “FARC: factible, cita entre Chávez y Marulanda”, *La Jornada*, 5 de septiembre de 2007.

⁷² Entrevista de Crisis Group, oficial de inteligencia, Bogotá, 22 de febrero de 2008.

⁷³ Según fuentes de prensa, un computador que se halló en un ataque contra un campamento de las FARC contenía los nombres de los oficiales a cargo de operaciones militares, mapas estratégicos y nombres de informantes. La información era en su mayor parte militar, pero también se refería a la policía y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se cree que esta información clasificada fue obtenida por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el principal grupo detrás de las operaciones exitosas en el sur y el suroccidente contra los bastiones de las FARC. “Infiltrado el corazón de las fuerzas militares”, *Semana*, 28 de julio de 2007.

⁷⁴ Entrevista de Crisis Group, oficial de inteligencia, Bogotá, 26 de febrero de 2008.

contra el gobierno⁷⁵. Fuentes de inteligencia creen que esta nueva estrategia tiene como fin tratar de recuperar legitimidad entre la población rural en general, procurando no afectar a los civiles al tiempo que se concentran en objetivos militares de alto impacto. Se cree que la serie de más de cinco atentados dinamiteros en Buenaventura (Valle) y uno en la sede de la policía en Cali (Valle) entre enero y abril de 2007⁷⁶ son un indicio de que ciertos frentes de las FARC empezaron a adaptar su estrategia desde hace algún tiempo⁷⁷. El llamado a una ofensiva general también podría alentar a una nueva generación de comandantes a fortalecer su actividad militar contra el gobierno, con miras a adquirir mayor prestigio dentro de la organización⁷⁸.

Al gobierno también le preocupa la posibilidad de que, como reacción a la presión militar y las tensiones diplomáticas, las FARC busquen refugio creciente del otro lado de la frontera venezolana⁷⁹. Un santuario venezolano todavía más grande beneficiaría enormemente a los insurgentes, y la política de seguridad nacional de Chávez, construida en torno a la posibilidad de una “guerra asimétrica” con actores externos, en particular Estados Unidos⁸⁰, podría considerar a las FARC como una “capa protectora” adicional en el evento de un ataque contra Venezuela⁸¹.

⁷⁵ “Saludo de Manuel Marulanda Vélez Comandante en jefe de las FARC”, FARC-EP, 3 de enero de 2008.

⁷⁶ Entrevista de Crisis Group, oficial de inteligencia, Bogotá, 22 de febrero de 2008.

⁷⁷ Según informes de inteligencia, hubo un movimiento de más de 1.500 insurgentes en las cordilleras Central y Occidental y en la costa Pacífica en un intento por rodear a Cali. El propósito era asegurar un corredor estratégico hasta el Pacífico, sobre todo con fines de narcotráfico. “¿Por qué está fallando la estrategia de la seguridad democrática en el Valle?” *Semana*, 10 de abril de 2007. Entre abril y junio de 2007, los departamentos más afectados por ataques contra la fuerza pública fueron el Valle del Cauca y Nariño. En el Valle los ataques aumentaron de catorce en el mismo período en 2006 a 28 en 2007, siendo Buenaventura el área más crítica. “Boletín No. 17 – Informe Especial”, Fundación Seguridad y Democracia, 2 de agosto de 2007, pp. 51-52.

⁷⁸ Entrevista de Crisis Group, congresista, Bogotá, 19 de febrero de 2008.

⁷⁹ Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Bogotá, 27 de febrero de 2008.

⁸⁰ Chávez ha establecido nuevos cuerpos armados como la Reserva Nacional y la Guardia Territorial para proteger a la nación en caso de invasión. Crisis Group, Informe sobre América Latina N°19, *Venezuela: La revolución de Hugo Chávez*, 22 de febrero de 2007, pp. 17-18.

⁸¹ Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Bogotá, 27 de febrero de 2008.

El dilema planteado por la presencia de las FARC en las fronteras se hizo aún más evidente tras el bombardeo del campamento de Reyes en territorio ecuatoriano. Aunque el ataque significó un golpe sin precedentes contra los insurgentes, produjo la crisis diplomática y política más seria entre Colombia y Venezuela y Ecuador en muchos años. Chávez rompió las relaciones y ordenó el emplazamiento de tanques y aviones de combate en la frontera⁸². Ecuador (y de paso Nicaragua) también rompió las relaciones diplomáticas y denunció al gobierno de Uribe por violar su territorio ante la OEA y en la reunión cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, el 7 de marzo. Con el apoyo de Estados Unidos, Bogotá justificó su acción como defensa propia contra un grupo terrorista que lo atacaba desde estados vecinos⁸³. Pero Colombia y Estados Unidos quedaron aislados, como demostraron las resoluciones que aprobaron la OEA el 5 de marzo de 2008, el Grupo de Río el 7 de marzo y los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA el 17 de marzo. La esencia de dichas resoluciones fue, inequívocamente, “rechazar la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia... [por constituir] una clara violación de los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA” y exigir “plenas disculpas” y el “compromiso de Colombia” de que los ataques “no se repetirían en ninguna circunstancia”⁸⁴.

El gobierno de Uribe ha utilizado los documentos hallados en el computador de Reyes, que indican una cooperación entre miembros de los gobiernos de Chávez y (menos claramente) de Correa y las FARC, para presionar a los estados vecinos a cumplir con las disposiciones internacionales en contra de santuarios para grupos terroristas. La resolución final adoptada por la OEA reiteró “el firme compromiso de todos los Estados Miembros de combatir las amenazas de la seguridad provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas

vinculadas a actividades de narcotráfico”⁸⁵. Sin embargo, persiste la tensión con Ecuador y Venezuela, lo cual reduce las probabilidades de lograr el tipo de cooperación fronteriza que tanto se necesita.

Venezuela anunció el restablecimiento de las relaciones con Colombia y en la sesión final de la OEA se le reconoció el haber revertido su anterior postura belicista y haber llegado a un compromiso que permitió la adopción unánime de la resolución final. Tras las serias acusaciones que le hicieron de apoyar financieramente a las FARC, el gobierno de Chávez ha anunciado nuevas acciones contra presuntas pistas aéreas de narcotraficantes en su territorio, confiscado cargamentos de cocaína y capturado a un notorio narcotraficante colombo-venezolano, Hermágoras González Polanco⁸⁶. Sin embargo, se afirma que Estados Unidos está considerando la posibilidad de incluir a Venezuela en su lista de patrocinadores estatales de grupos terroristas. Eso implicaría potenciales sanciones serias contra Venezuela, pero es probable que dicha medida generaría más simpatía por Chávez en el hemisferio⁸⁷.

Ecuador no ha restablecido las relaciones diplomáticas y hace poco demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones aéreas para destruir cultivos de coca. Sin embargo, esta demanda se venía gestando desde hace bastante tiempo y no guarda relación con el ataque del 1° de marzo. Las posibilidades de restaurar algo de equilibrio en los vínculos bilaterales, incluido un mayor rechazo a los santuarios de las FARC, parecen más prometedoras que con Venezuela⁸⁸. Hace poco Correa dijo que, aunque rechazaría cualquier incursión de tropas colombianas o

⁸² Tan sólo unos 1.500 soldados llegaron hasta la frontera. Los modernos aviones de combate rusos de Venezuela todavía no han entrado en operación, en especial porque los pilotos todavía están en entrenamiento y por ello no podían ser emplazados. Entrevista de Crisis Group, analista europeo, Caracas, 3 de abril de 2008.

⁸³ Entrevistas de Crisis Group, altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos y del gobierno colombiano, Bogotá, 4 de abril de 2008.

⁸⁴ “Resolution of the Twenty-fifth meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs”, OEA/SER.F/II.25 RC.25/RES.1/08, 18 de marzo de 2008. Pese a unirse a la aprobación unánime, Estados Unidos disintió del párrafo que rechaza la incursión de Colombia en Ecuador, aduciendo que con base en anteriores resoluciones de la OEA y la ONU, también se debería haber reconocido el derecho de Colombia a su propia defensa.

⁸⁵ *Ibid.*, párrafo 6.

⁸⁶ Se afirma que González dirigía el cartel de la Guajira, en el noroccidente de Colombia, y que figuraba en la “lista de personas buscadas” de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses creen que tiene vínculos con el grupo paramilitar AUC. Nació en Colombia pero también tiene un documento de identidad venezolano. “High Level Drug Trafficking Suspect will be Tried in Venezuela”, *Los Angeles Times*, 11 de marzo de 2008, en www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-gordito11mar11,1,3244908.story.

⁸⁷ Entrevistas de Crisis Group, altos funcionarios del Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad, Washington, D.C., 7 de abril de 2008; “U.S. finds possible Venezuela-FARC ties ‘disturbing’”, Reuters, 12 de marzo de 2008; y “Memo to Bush: Don’t Accuse Chavez of backing terrorism”, 13 de marzo de 2008, *Miami Herald*, en www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N12208327.htm.

⁸⁸ “Ecuador Starts Action at UN World Court against aerial spraying by Colombia”, 1 de abril de 2008, www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=26167&Cr=ecuador&Cr1=colombia.

de cualquier otro país, también consideraría una nueva presencia de las FARC como un “acto de guerra”⁸⁹.

Las incertidumbres económicas y políticas también podrían perjudicar la estrategia militar de Uribe. Existe la inquietud de que el gasto simultáneo de ofensivas de alto impacto y la consolidación territorial se torne excesivo si se presenta una recesión económica o si no se pueden garantizar más ingresos tributarios. No obstante, se espera que Colombia mantenga durante algún tiempo el crecimiento económico estable de que ha disfrutado durante los últimos cuatro años, y en 2006 su Congreso aprobó un impuesto adicional para cobrar a los ciudadanos más acaudalados para financiar la política de seguridad. Se calcula que, en un período de cuatro años (2007-2010), el nuevo impuesto producirá 8 billones de pesos colombianos (unos US\$4.000 millones)⁹⁰. Aunque no se sabe si el próximo gobierno de Estados Unidos le dará a Uribe el mismo respaldo que recibió del gobierno de Bush o si más bien hará ajustes profundos al Plan Colombia, estos ingresos podrían contrarrestar cualquier recorte importante, por improbable que sea, en la ayuda de Washington⁹¹.

La doctrina contrainsurgente convencional estipula que el control físico de un territorio sólo se puede sostener si la acción militar viene seguida de los beneficios positivos de una mayor presencia del Estado. Las fuerzas armadas colombianas han tenido cada vez más éxito en lo primero; la estrategia de consolidación de la seguridad del gobierno de Uribe de 2007 reconoció la necesidad de lo segundo. Cerca del 70 por ciento de los campesinos colombianos viven en condiciones de pobreza. Los programas de gobernabilidad rural e infraestructura económica que

los beneficien ampliarían sus opciones y reducirían los ingresos por droga de las FARC⁹².

Con el fin de garantizar la continuación de su estrategia militar, Uribe también ha insinuado la posibilidad de presentar una vez más su candidatura a la presidencia y ha instado a su coalición en el Congreso a convertir en ley su política de seguridad democrática. Sin embargo, el escándalo cada vez más profundo de la “parapolítica” podría complicar todas las iniciativas legislativas de Uribe, en especial las que requieren más que una mayoría simple⁹³. No obstante, incluso con una continuidad personal y de políticas garantizada y con una persistente presión militar, es posible que las FARC no acepten negociar si no se les ofrecen incentivos políticos, y específicamente el reconocimiento por parte del gobierno de la existencia de un conflicto armado “legítimo” y la voluntad de discutir reformas políticas e institucionales como parte de un proceso de paz⁹⁴. Hasta el momento, el gobierno sólo ha insinuado la posibilidad de considerar una asamblea constituyente como parte de un acuerdo futuro.

IV. CONCLUSIÓN

El problema de los secuestrados por las FARC ha vuelto a ocupar un lugar prominente en la agenda gubernamental, pero no ha habido progreso real tendiente a lograr el canje de rehenes por prisioneros. La continuación de los esfuerzos de facilitación extraoficiales de Chávez está siendo explotada por los insurgentes para recobrar algo de visibilidad política. Sin embargo, los esfuerzos de Chávez han perdido gran parte de su fuerza desde que, a raíz del ataque colombiano al campamento guerrillero en Ecuador el 1° de marzo de 2008, se encontraron mensajes en el computador de las FARC que vinculan a los rebeldes con el gobierno venezolano. Las recientes medidas del gobierno, entre ellas un decreto que autoriza la

⁸⁹ *El Tiempo*, 18 de abril de 2008.

⁹⁰ El nuevo impuesto recae sobre 7.400 personas naturales y empresas y equivale al 1,2 por ciento de los activos líquidos. “El 1,2%, impuesto al patrimonio”, *El País*, 16 de noviembre de 2006; “Nuevas aeronaves y armas de precisión adquirirá el Ejército para guerra contra las Farc”, *El Tiempo*, 14 de abril de 2008. Sin embargo, según el contralor general, el gobierno debe contemplar la posibilidad de darle permanencia a este impuesto con el fin de garantizar una fuente estable de recursos para su gasto militar. “La Contraloría plantea la permanencia indefinida del impuesto de guerra”, *Caracol*, 2 de abril de 2008.

⁹¹ Entrevista de Crisis Group, congresista, Bogotá, 17 de febrero de 2008. Entrevista telefónica de Crisis Group, analista, Bogotá/Quito, 19 de marzo de 2008. En general, América Latina no ha sido un tema importante en la actual campaña presidencial de Estados Unidos.

⁹² Véanse recomendaciones en Crisis Group, Informe sobre América Latina N°17, *La reelección de Uribe: ¿Puede la UE ayudarle a Colombia a desarrollar una estrategia de paz más equilibrada?*, 8 de junio de 2006; Crisis Group, Boletín informativo sobre América Latina N°11, *Mayores retos para Uribe en Colombia*, 20 de octubre de 2006; e Informe de Crisis Group, *La droga en América Latina II*, op. cit.

⁹³ Sobre el escándalo de la “parapolítica”, véase Crisis Group, Informe sobre América Latina N°20, *Los nuevos grupos armados de Colombia*, 10 de mayo de 2007; e Informe de Crisis Group, *La droga en América Latina II*, op. cit., p. 37.

⁹⁴ Entrevista de Crisis Group, experto en las FARC, Bogotá, 11 de febrero de 2008.

liberación de insurgentes encarcelados, tampoco han tenido éxito. En esencia el asunto está nuevamente en el punto cero, pues las FARC siguen pidiendo, y el gobierno rechazando, la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera.

La intransigencia de Uribe se ha visto reforzada por los éxitos militares. La muerte de dos miembros del Secretariado de las FARC y, en general, los indicios de debilidad de los rebeldes han instado a varios funcionarios a afirmar que la victoria está cerca. Con un amplio apoyo a su política de seguridad y el rechazo cada vez mayor de la opinión pública a las prácticas de las FARC, el gobierno parece confiar en que puede forzar a los insurgentes a rendirse y a desmovilizarse, utilizando mecanismos legales semejantes a los empleados con los paramilitares⁹⁵.

Sin embargo, es bastante probable que una estrategia militar que no tenga como complemento una estrategia política resulte insuficiente. Las FARC ya se están adaptando a las nuevas circunstancias. También es mucho menos probable que confíen en la buena voluntad del gobierno con respecto a los acuerdos de post desmovilización, en comparación con los paramilitares. Dada la persistencia de la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador y Venezuela y la consiguiente ausencia de cooperación fronteriza, la habilidad de las FARC para utilizar santuarios es un obstáculo formidable para la política de seguridad de Uribe. Incluso si el gobierno logra debilitar aún más a las FARC, es poco probable que los insurgentes acepten negociar si antes no les ofrecen incentivos políticos.

Como complemento de su estrategia militar, el gobierno colombiano debe diseñar e implementar sin demora una estrategia política que le permita restablecer relaciones de trabajo con Ecuador y utilizar la autoridad de monitoreo fronterizo de la OEA para conseguir una mayor cooperación contra las incursiones y presencia de las FARC; enseguida debe tratar de replicar ese mismo mecanismo con Venezuela. Para fines humanitarios y con el fin de ampliar el apoyo internacional, debe emprender nuevos esfuerzos para el logro de un intercambio humanitario. Como un primer paso, Uribe debe considerar la posibilidad de ofrecerles a los insurgentes la desmilitarización con monitoreo internacional de los municipios de Florida y Pradera (o una zona de tamaño similar) durante 45 días, siempre y cuando exista el acuerdo previo de que el intercambio se hará durante ese período. El gobierno también debe dar un mandato claro al grupo *ad hoc* de países amigos que apoyan el canje y equilibrar el papel de Chávez en dicho grupo invitando a Brasil a desempeñar un rol más activo.

Bogotá/Bruselas, 29 de abril de 2008

⁹⁵ Para los antecedentes, véase Informe de Crisis Group, *Los nuevos grupos armados de Colombia*, *op. cit.*, pp. 22-25; y Boletín informativo de Crisis Group, *Mayores retos para Uribe*, *op. cit.*, pp. 5, 8.

ANEXO A MAPA DE COLOMBIA



Base 802670AI (R00820) 6-01

Cortesía de The General Libraries, The University of Texas at Austin

ANEXO B

ACERCA DEL INTERNATIONAL CRISIS GROUP

El Internacional Crisis Group (Crisis Group) es una organización no gubernamental independiente y sin ánimo de lucro con casi 120 empleados en cinco continentes que, a través del análisis de la situación sobre el terreno y labores de sensibilización al más alto nivel, busca prevenir y resolver conflictos violentos.

El trabajo de Crisis Group se basa en el análisis de la situación sobre el terreno por lo que sus equipos de analistas políticos tienen base cerca de o en los países en riesgo de comienzo, escalada o reaparición de conflicto. Con base en la información y el análisis producido en el terreno, compone informes analíticos con recomendaciones dirigidas a quienes toman las decisiones en el ámbito internacional. Crisis Group también publica *CrisisWatch*, un boletín mensual de doce páginas cuyo objetivo es la actualización regular y rápida de las situaciones más significativas de conflicto actual o potencial en el mundo.

Los informes y boletines informativos de Crisis Group son distribuidos por correo ordinario y electrónico a funcionarios de ministerios de asuntos exteriores y organizaciones internacionales, y publicados simultáneamente en la página web de la organización (www.crisisgroup.org). Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y con quienes les influyen (incluidos los medios de comunicación) para atraer atención hacia sus análisis y generar apoyo para sus recomendaciones.

Los miembros del Consejo Directivo de Crisis Group – que incluye figuras prominentes en los campos de la política, la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación – participan de forma directa en la promoción de los informes y recomendaciones de la organización entre quienes diseñan la política en todo el mundo. El Consejo de Administración de Crisis Group está presidido conjuntamente por el antiguo Comisario Europeo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Christopher Patten, y el antiguo Embajador de los Estados Unidos, Thomas Pickering. El Presidente y Consejero Delegado de la organización es, desde enero de 2000, el antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de Australia, Gareth Evans.

Crisis Group tiene su sede central en Bruselas y oficinas de sensibilización en Washington D.C. (donde tiene entidad jurídica), Nueva York, Londres y Moscú. En la actualidad la organización cuenta con trece oficinas sobre el terreno (Amman, Bishkek, Bogotá, Dakar, Dushanbe, El Cairo, Islamabad, Kabul, Nairobi, Pretoria, Prístina, Seúl, Tbilisi y Yakarta), y analistas trabajando en más de 50 países y regiones en crisis en cuatro continentes. En África esos países incluyen: Angola, Burundi, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Guinea, Liberia, Región del Sahel, República

Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Uganda y Zimbabue; en Asia: Afganistán, Cachemira, Corea del Norte, Indonesia, Kazajstán, Kirguistán, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tadyikistán, Turkmenistán y Uzbekistán; en Europa: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro y Serbia; en Oriente Medio: la región comprendida desde el norte de África hasta Irán; y en América Latina: Colombia, la región andina y Haití.

Crisis Group recauda fondos de gobiernos, fundaciones, empresas y donantes individuales. En la actualidad recibe fondos de los siguientes ministerios y agencias gubernamentales: Secretaría de Asuntos Exteriores de Alemania, Agencia para el Desarrollo Internacional de Australia, Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria, Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica, Agencia para el Desarrollo Internacional de Canadá, Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional de Canadá, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Ministerio de Asuntos Exteriores Principado de Liechtenstein, Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Real Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Agencia para el Desarrollo Internacional de Nueva Zelanda, Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía.

Entre las fundaciones y los donantes del sector privado se encuentran: Carnegie Corporation of New York, Compton Foundation, Ford Foundation, Fundación DARA Internacional, Carso Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt Alternatives Fund, Kimsey Foundation, Korea Foundation, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela Omidyar Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund, ProVictimis Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing Trust, Rockefeller Philanthropy Advisors and Viva Trust.

enero de 2007

Sede internacional

149 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium · Tel: +32 2 502 90 38 · Fax: +32 2 502 50 38

E-mail: brussels@crisisgroup.org

Oficina en Nueva York

420 Lexington Avenue, Suite 2640, New York 10170 · Tel: +1 212 813 0820 · Fax: +1 212 813 0825

E-mail: newyork@crisisgroup.org

Oficina en Washington

1629 K Street, Suite 450, Washington DC 20006 · Tel: +1 202 785 1601 · Fax: +1 202 785 1630

E-mail: washington@crisisgroup.org

Oficina en Londres

48 Gray's Inn Road, London WC1X 8LT · Tel: +44 20 7831 1436 · Fax: +44 20 7242 8135

E-mail: london@crisisgroup.org

Oficina en Moscú

Belomorskaya st., 14-1 – Moscow 125195 Russia · Tel/Fax: +7-495-455-9798

E-mail: moscow@crisisgroup.org

Oficinas regionales y representaciones de campo

Crisis Group también opera en cerca de 27 lugares diferentes en África, Asia, Europa, el Medio Oriente y América Latina.

Para detalles, véase www.crisisgroup.org.
